

## **Razones para un optimismo politológico**

*Pocos países vivieron un proceso de decadencia económica y política tan acentuado como la Argentina en los últimos años. Sin embargo, en el plano político surgen señales que dan lugar al optimismo: la veloz deslegitimación de un modelo de democracia delegativa, la multiplicación de la «voz horizontal» entre los ciudadanos como respuesta a la falta de referencias institucionales creíbles y la generación de formas autónomas y autosustentadas de capital social, encarnadas en centenas de asambleas barriales, revitalización de ONGs y compromiso voluntario en acciones sociales. A su vez, estas situaciones desafían las explicaciones tradicionales de la ciencia política sobre cuándo gran parte de las clases medias decide abrazar una mayor democratización de las relaciones políticas como solución a la crisis.*

**Fabián Echegaray**

Quien observa hoy a la Argentina con ojos de economista o casi cualquier otra profesión, solo puede tener motivos para la alarma y la desesperanza. Por eso, quizá la mirada del politólogo sea la única con un dejo de optimismo. Dada su reinante escasez, vale la pena detenerse para entender sus fundamentos. El país está despertando simultáneamente a tres situaciones políticas extraordinarias: la deslegitimación de la «democracia delegativa», la multiplicación acelerada de la «voz horizontal» como respuesta masiva a la crisis, y la

---

**Fabián Echegaray:** doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Connecticut; profesor de la Universidade do Vale de Itajaí (Santa Catarina, Brasil); director de Market Analysis Brasil. @:<fabian@marketanalysis.com.br>.

**Palabras clave:** teoría política, democracia, crisis, Argentina.

---

generación de formas autónomas y autosustentadas de capital social. Desde ya, no son situaciones que involucren a todos los argentinos, ni siquiera a una mayoría. Pero posee características tanto inéditas como favorables a su continuidad: en primer lugar, todas parten del principio de que la democracia es la mejor forma de gobierno; en segundo lugar, envuelve, por primera vez de una forma masiva la movilización y autoorganización política, en líneas extrapartidarias, de sectores significativos de las clases medias y medias-altas; y en tercer lugar, su naturaleza esencialmente metropolitana garantiza un impacto por partida doble, debido a la proximidad del centro de poder y la mayor visibilidad que adquiere entre los medios de comunicación.

### ***El eje del cambio***

Por detrás de estos fenómenos no asoma únicamente un evento fortuito, como un presidente caído en desgracia, un escándalo que genera indignación aislada o un brote inflacionario capaz de trastocar por algún tiempo hábitos y costumbres. Esas eventualidades ya se produjeron y, en lugar de favorecer un reordenamiento más participativo y republicano, reforzaron la aspiración por un liderazgo personalista fuerte, capaz de tomar decisiones por todos y traducir su mandato en imposiciones unilaterales (v. Bosoer/Leiras). El germen de la novedad está en la simultánea valoración de la práctica democrática<sup>1</sup> con el agotamiento de la división schumpeteriana del trabajo político y del poder –división que fue aprendida y transmitida generación tras generación, como forma legítima de actuación cívica y organización colectiva. Lo que se cuestiona es la separación entre el ciudadano como alguien que vota y vuelve a su mundo personal, y el político como aquel que decide por los próximos cuatro años. Se pone en tela de juicio el supuesto que dice que el comportamiento público y el privado siguen caminos separados, como también la práctica individual de criticar el poder en privado y endosar las autoridades en público. Por debajo de estos cambios emerge un cuestionamiento a la idea de abdicar del civismo activo como la salida más racional de los ciudadanos en una democracia de masas. Se revierte el cálculo sobre las ventajas de la tradicional asignación de tareas políticas que implicó transferir la definición de lo que es deseable y realizable en política para el Gobierno, las obligaciones de vigilancia y fiscalización a la televisión, sus periodistas, o sus columnistas, y las responsabilidades por participar colectivamente y movilizar intereses a los aparatos partidarios o gremiales.

---

1. Recientes encuestas de opinión pública con muestras nacionales representativas sistemáticamente apuntan el apoyo al régimen democrático, ubicándose entre 64% y 85%, dependiendo del fraseo de la pregunta; v. PNUD, febrero 2002; *La Nación*, 31/3/02.

El replanteo en marcha sugiere volver a politizar la vida privada y reducir la distancia entre las iniciativas individuales o grupales y la gestión de los bienes públicos. En nombre de la eficacia de sus resultados y de una preferencia individual, supuestamente natural, a «verse libre de la política»<sup>2</sup>, la división tradicional del trabajo político se consolidó sobre el principio de que los manda-

tarios y sus técnicos toman las decisiones por todos y los electores refrendan o no lo actuado vía comicios o, eventualmente, encuestas. Hoy tal lógica es explícitamente desafiada<sup>3</sup>.

***Tras años  
 sin poder encajar  
 la Argentina en  
 el argumento  
 economicista  
 de origen  
 democrático,  
 uno puede sospechar  
 que se le ha  
 encontrado  
 la vuelta  
 al enigma***

***Las fuentes del cambio***

¿Era esperable esta súbita demanda por más democratización frente a un cuadro de larga recesión, onda de saqueos, continuos cortes de rutas por grupos de desempleados y multiplicación de los delitos? No. La opción por el orden, antes que por más democracia, prevaleció entre las clases medias y medias-altas a lo largo de la historia argentina, y, como formulado por las teorías más clásicas del desarrollo político, cuando las condiciones sociales podrían haber favorecido una participación regular y sustantiva<sup>4</sup> a través de la articulación de dichas clases en asociaciones y mecanismos de influencia política, ellas favorecieron el modelo más acomodado de democracia. Para sorpresa de teóricos y observadores, la mayor conciencia y exigencia democrática de aquellas clases, que el progreso material fue incapaz de traer, fueron resultado de la decadencia económica y la parálisis política.

Para el politólogo, semejante desenlace debería ser otro motivo para el optimismo: tras años sin poder encajar la Argentina en el argumento economicista de origen democrático, uno puede sospechar que se le ha encontrado la vuelta al enigma. Al desafío pionero de Guillermo O'Donnell (1973, 1982), que revertía

2. Así lo presuponía Robert Dahl en su libro *A Preface to Democratic Theory* (University of Chicago Press, Chicago, 1956), que diera aliento a la versión estrictamente procedimentalista-electoralista de la democracia, fuertemente abrazada y divulgada por los líderes políticos argentinos tras el retorno a la democracia en 1983.

3. En no poca medida, las decisiones contrarias al derecho de propiedad y de libertades públicas tomadas por el Gobierno mediante confiscación de depósitos bancarios, declaración de Estado de sitio y represión policial de manifestaciones pacíficas, dejaron en claro que las tradicionales reglas de juego son dispensables coma también ineficaces.

4. La referencia obligatoria aquí es el trabajo de Seymour Lipset publicado en *El hombre político* (Eudeba, Buenos Aires, 1960).

el efecto político del progreso económico, augurando autoritarismo en lugar de más democracia, ahora podemos agregarle el argumento sobre cómo una democratización más capilar de las relaciones políticas es estimulada por la debacle económica y la ausencia de opciones políticas. Es más, otras líneas clásicas de razonamiento sobre cuáles son las condiciones que llevan a una democracia más cívica y participativa, también convergen en la misma dirección que invita a revisar las hipótesis típicas de trabajo.

1. Comencemos por la línea de argumento centrada en las bases sociales de una mayor democratización cívica: ella nos sugiere que es necesario que exista una burguesía para generar auténtica democracia (Barrington Moore). Y burguesía supone no solo una clase autopercebida como media, sino vinculada cotidianamente a actividades comerciales y de negociación privadas pero a escala masiva. La disminución del aparato estatal y el fin de las reglas de estabilidad laboral, junto con la recesión de cuatro años, expulsaron a millones de personas, tradicionalmente definidas como de clase media, a las incertezas del mercado. Producto de ello, el desempleo se disparó<sup>5</sup>; pero aumentó infinitamente más, y con una penetración familiar más fuerte, la propensión al cuentapropismo corporizado en el lanzamiento de iniciativas propias de supervivencia financiera<sup>6</sup>. La misma certidumbre respecto a que el Estado, las empresas ni un nuevo ciclo económico podrán cambiar la situación personal en el corto plazo, ayuda a consolidar la noción de intereses comerciales propios y la necesidad de defensa articulada y colectiva de los mismos.

Claro que tal situación está lejos de parecerse al surgimiento de una clase consolidada, con intereses comunes, organizada institucionalmente y con fuerza política. Pero tampoco fue así en el comienzo de las experiencias burguesas europeas. De hecho, la cristalización de tales intereses y articulaciones significó la propia democratización del sistema, o el equivalente a su día anterior. Por otro lado en la Argentina, como en toda la región, los canales disponibles de organización y consolidación de intereses (sindicatos, federaciones, asociaciones comerciales) son preexistentes y fueron creados unilateralmente por el Estado, restándole impulso a la autonomía política de aquel germen de burguesía, en lugar de motorizarla.

---

5. En octubre de 2001, según la última medición formal del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) la tasa abierta de desempleo trepaba a 18,3% (casi 3% más que 12 meses antes) y junto con la de subempleo comprometía a 29% del total de la población (Indec, marzo de 2002).

6. Entre los argentinos, 7,8% exhibían actitudes fuertemente emprendedoras, porcentaje virtualmente idéntico al de nuevos emprendedores (8%), dejando el país en quinto lugar (entre 21) en términos de proporción de empresas nacientes; fuente: *Monitor Global de Emprendorismo*, 11/2001. Por otro lado, más de 29% calificaba como trabajadores por cuenta propia y empleadores (Indec, marzo de 2002).

A pesar del drástico cambio económico mencionado, buena parte de lo que se entiende como la clase media en Argentina continúa sin militar en las filas de los micro y pequeños empresarios. No obstante, desde finales de noviembre de 2001, cuando fue decretada la confiscación de los ahorros y cuentas corrientes de más de 61.000 millones de dólares correspondientes en su mayoría a inversiones y depósitos personales, esa franja (integrada por empleados públicos,

***Cuanto más  
 extiende la  
 resolución  
 del problema,  
 el Gobierno  
 más favorece  
 la politización  
 organizada  
 y autónoma  
 de los sectores  
 afectados***

jubilados y pensionistas, profesionales independientes, asalariados industriales, empleados de comercio, entre otros) también tuvo la oportunidad de reconocer intereses comunes y comprobar que mal podría esperarse una defensa de los mismos a través del Estado o los actores tradicionales de mediación.

Si el primer paso fue la búsqueda de soluciones judiciales individuales que sumaron casi 100.000 procesos, el paso siguiente esperable es la convergencia de dichos intereses particulares en mecanismos organizados de defensa colectiva, dada la resistencia del Gobierno a dejar que las acciones legales prosperen y el alegato de los bancos sobre la falta de recursos para efectuar las devoluciones pertinentes. Irónicamente, cuanto más extiende la resolución del problema, el Gobierno más favorece la politización organizada y autónoma de los sectores afectados, movimiento singular que –como ocurriera en otros contextos– tiene grandes posibilidades de generar vida propia permanente.

Por lo tanto, en Argentina hoy encontramos miembros de la clásica clase media reconociendo sus intereses comunes y articulándose para defenderlos, sin esperar ni confiar en el papel mediador o protector del Estado o los sindicatos y asociaciones de clase. En otras palabras, un actor social numeroso, actitudinalmente próximo a la mentalidad burguesa de intereses de clase visibles y forzado a hacer de la negociación su rutina diaria, y crecientemente movilizado y organizado en defensa de tales intereses.

2. Teóricos del argumento culturalista corrigieron hace tiempo su primera propuesta que postulaba la preexistencia de orientaciones prodemocráticas para la difusión y ampliación de la democracia. A partir de Rustow, ya en los años 70 se aceptó que es la propia convivencia con la democracia la que enseña a los individuos un comportamiento favorable a la misma. El actual caso argentino ratifica esa lógica. Los adultos que hasta el final de la dictadura estaban más acostumbrados a definirse frente a sus autoridades como electores, contribu-

yentes, consumidores o, genéricamente, como pueblo, aprenden con el tiempo a comportarse como ciudadanos. Y, hoy a partir de la experiencia directa en microexperimentos de decisión pública como las asambleas barriales, vemos robustecerse la cultura democrática. Esos «town meetings» están generando, de la manera más visible y pedagógica posible, un nuevo ciudadano, conciente de derechos y deberes, incluyendo las manifestaciones callejeras de protesta, los escraches a jueces, políticos y represores, y hasta los circunstanciales abucheos y escenas pugilísticas con representantes de los gobiernos anteriores (expresiones, dígame de paso, también presentes en los originarios «town meetings» norteamericanos).

Sería legítimo preguntarse si tales fenómenos no formaron parte del paisaje histórico argentino en épocas anteriores. De hecho, revoluciones y revueltas populares como la de 1890-1904, movilizaciones multitudinarias como las de 1945, 1972-1974 y un sinnúmero de movimientos sociales y ONGs surgidas al calor del derrumbe de la dictadura tras la guerra de Malvinas en 1983-1984, sugieren que tales expresiones masivas de afirmación popular no resultaron desconocidas. Solo que ninguno de aquellos eventos cuestionó la división del trabajo político *per se*, buscando transferir el poder de un grupo o líder hacia otro antes que plantear la ruptura con la misma. Con esos antecedentes, algunos podrán preguntarse: si otras veces asistimos a un cuestionamiento parecido ¿por qué hoy habría de ser diferente?; ¿por qué tendríamos que suponer, como apresuradamente los politólogos hemos hecho otras veces, que un cambio genuino de cultura política ocurrió y alimenta ahora los nuevos hechos?

Estas preguntas exigen, antes, revisar cómo cambia la cultura política de una parte de la sociedad. Los referentes clásicos apuntan a tres elementos distintos: el recambio generacional que paulatinamente coloca en el centro del sistema político una generación socializada bajo otras experiencias y valores (Inglehart); una situación traumática que exige comportamientos diferentes a instituciones o prácticas alternativas (Almond/Verba); o una radical alteración en la relación costo-beneficio de las conductas y repertorios de acción practicados hasta el momento (Olson). Pocas dudas hay sobre la existencia de mudanzas radicales y traumáticas en los últimos años. Y tampoco puede negarse que desde 1983 pasaron años suficientes como para identificar la llegada de una generación nueva.

3. El tercer argumento, un nuevo cálculo racional, es quizá el más obvio y también el más difícil de argumentar sin que parezca arbitrario. Tal vez, el tradicional juego de cooperación que nutrió las conclusiones sobre la lógica de la acción colectiva ayude a ilustrarlo. Delante de un bien público accesible a todos

(p. ej., agua potable), en una situación de posible disminución de las rentas o rendimientos (p. ej., escasez) que exija un cambio momentáneo de conductas hacia la conservación del bien (p. ej., restricción del consumo), dos individuos pueden decidir cooperar (p. ej., ambos ahorran) o no. Las alternativas que sobran son más numerosas (el primer individuo puede optar por ahorrar y el segundo no, o viceversa, o ambas personas pueden optar por no ahorrar). Esas alternativas también son, desde el punto de vista personal, las más racionales en el corto plazo. ¿Para qué sacrificarme y ahorrar si el otro/los otros lo estarán haciendo y el resultado me beneficiará de cualquier forma?; ¿o para qué ahorrar si asumo que los otros tampoco ahorrarán?

Por décadas, esa lógica de la acción eximió a las clases medias de la participación (juego cooperativo) porque las consecuencias de tal opción nunca repercutieron gravemente de forma masiva y por un largo tiempo. Sin embargo, todo indica que el escenario para hoy es otro, donde se hace visible la pésima calidad de los resultados (bienes públicos) de un comportamiento no cooperativo. Y el detonador de esa revisión vuelve a ser la conexión visible entre pésimos bienes públicos (p. ej., corrupción, mala administración, recesión, paridad irreal del tipo de cambio) y pésimos bienes privados (p. ej., confiscación del dinero, congelamiento de los planes personales relacionados, achicamiento de las oportunidades personales, desempleo, etc.). La evidencia de un resultado del tipo «todos pierden» altera el costo-beneficio de las conductas típicas y motoriza nuevos repertorios de acción individuales, rápidamente masificados, impensables pocos meses atrás.

### ***Razones para el optimismo politológico***

Si un objetivo del politólogo es entender mejor cómo se produjeron los cambios, otro no menos importante es tratar de explicar por qué debieran verse con ojos esperanzados.

**Abandonando la democracia delegativa.** Probablemente un politólogo no necesite mucha persuasión para celebrar el fin de la democracia delegativa, especialmente después de leer el argumento originalmente disecado por O'Donnell (1992) sobre las características de este nuevo tipo de «animal político», como él mismo la llama. Desde la perspectiva del ciudadano, la democracia delegativa no es más que un conjunto de rituales electorales confirmatorios de la concentración del poder público en una persona, combinado con la renuncia popular a tentativas serias de fiscalización y participación ciudadana durante periodos no electorales. Algo que pocos cientistas sociales asociarían a la noción de democracia.

Sin embargo, este modelo de organización del poder y de ética pública de la democracia no solo fue aceptado dentro y fuera del país sino también recomendado como la fórmula para el desarrollo y el éxito democráticos. El delegacionismo decisonal pasaba a ser una cuestión de estilo idiosincrático de liderazgo, disociado del contenido de las decisiones tomadas. Los presidentes podrían

decidir ser corruptos o no, ser furiosa o racional-

mente privatistas, exhibir preocupación

social o ser del todo indiferentes. Esta

cuestión de los contenidos obviamente

es importantísima y ayuda mucho

a explicar la debacle argentina, pero

no es el eje de lo que se debate como

democracia delegativa, que es una cuestión

estrictamente vinculada con el ejercicio del

poder, la representación y el liderazgo ins-

titucional. Entre los aspectos políticos de esa

fórmula pueden enumerarse: el recurso a

mecanismos extrainstitucionales de deci-

sión (decretos, leyes de emergencia, *per*

*saltum* jurídicos, sobornos, presiones po-

liciales, abuso de fondos reservados);

confusión indisimulada de intereses

privados y públicos; vaciamiento de las

formas de control del poder; y el uso

discrecional de la justicia y de la fuerza

pública como recursos de negociación

y capitalización política, entre otros.

Concomitantemente, dicha fórmula

gozaba de la aceptación tácita aunque

visible de la mayoría. En Argentina ese

liderazgo no fue solo tolerado sino

también premiado con votos, inclusi-

ve más allá de su eventual coexisten-

cia con condiciones económicas favorables. Así apuntaron diversos exámenes

de los resultados electorales y de popularidad hasta 1997: la variable que cap-

turaba el efecto exclusivamente político del liderazgo del Ejecutivo generaba

votos y aprobación presidencial en la medida en que éste se tornaba más asertivo,

controlado por el efecto del desempeño económico (Echegaray; Echegaray/

Elordi). Los datos indicaban claramente que el ejercicio explícito del comando





***El momento de legitimidad instrumental de la democracia delegativa, pasó gracias al repunte económico de los 90***

político por parte del presidente contaba con las muecas de simpatía de la población, aunque significara centralización del poder, eventuales abusos de autoridad y una nula rendición de cuentas. El confort psicológico del fuerte liderazgo compensaba esos déficit.

Por otro lado, para quienes trabajaron el concepto de la democracia delegativa, la cristalización de ese imperialismo decisonal del presidente suponía dos cosas: en primer lugar, la expresión de una respuesta sistémica y eficiente (aunque oblicuamente democrática) a las presiones capaces de erosionar el consenso democrático; en segundo lugar, la preexistencia de vulnerabilidad cívica por parte del público, resultado de hábitos y costumbres modelados sobre la matriz cultural autoritaria. Como tantas veces en la historia, el liderazgo carismático actuaría como «pegamento» entre un público sin vocación sistémica por la democracia y un sistema democrático sin militancia cívica que lo resguardase.

Sin duda, volver a discutir el concepto 10 años después (tras haber sido adoptado casi acríticamente durante los años 90) puede ser una práctica saludable. Pero parece serlo más aún someter el concepto a la realidad actual y entender dónde fue desmentido. No es el objetivo de este artículo, pero puede iniciarse la labor admitiendo que si la existencia de un régimen de democracia delegativa no docilizó las mayorías para aceptar un liderazgo discrecional *ad infinitum* es porque otros valores (participacionistas, prodemocráticos) ya estaban presentes y porque tal estilo no resultó todo lo eficiente que se esperaría durante el tiempo que duró.

De 1997 en adelante, el consenso antes comentado empezó a hacer agua, y los resultados electorales han sido testimonio de ello. El momento de legitimidad instrumental de la democracia delegativa, gracias al repunte económico de los 90, pasó. No solo pasó como parece haber deslindado la fórmula delegacionista de liderazgo político, sobre la posibilidad de alcanzar resultados económicos buenos para toda la sociedad. Hoy, al menos para la clase media, las premisas de lo que se define como liderazgo político parecen disociadas de aquel delegacionismo pro-activo.

**Ejercitando la voz horizontal.** El término «voz horizontal» no es tan popular entre los politólogos. Bosquejado por O'Donnell (1986) al ensanchar los aportes de Hirschman sobre las posibles respuestas a una situación de crisis, el término pasó

desapercibido<sup>7</sup>, pero no por ello fue menos útil para entender las bases de la renovación cultural y representatividad cívica de la democracia entre los argentinos. Hirschman esquematiza tres tipos posibles de respuesta frente a situaciones de descontento con el desempeño de organizaciones: la salida, la reclamación o el silencio leal. Rápidamente, observadores atentos de la realidad política argentina recurrieron al esquema hirschmaniano para traducir el abanico de expresiones comentadas por los medios: las filas en los consulados extranjeros (la salida), los cacerolazos y piquetes (la voz o reclamación), y –mucho más raro– el silencio sepulcral de los simpatizantes partidarios y del resto de los argentinos que no corrían atrás de su pasaporte ni de sus utensilios de cocina.

Entre otras cosas, lo que los usuarios de este simple pero utilísimo abordaje racional dejan de lado<sup>8</sup>, es que la opción de la voz no queda circunscripta solo al plano vertical (esto es, de los ciudadanos hacia los gobernantes), sino que la misma se genera y alimenta en un reclamo de naturaleza horizontal: la interacción comunicativa frecuente, deliberativa y de consecuencias identitarias entre personas percibidas como iguales y con intereses comunes. La falta de atención a este tipo de voz no es casual: fue justamente el modo de acción más violentamente reprimido por el golpe de 1976 y, tras la restauración de la democracia en 1983, el más boicoteado por los partidos y sindicatos que no consiguieron absorberlo, permaneciendo vivo en su formato más visible de movimientos sociales y ONGs. De allí la sorpresa de autoridades, policías, medios de comunicación y de las propias personas cuando se descubre que en contextos diferentes y por personas aparentemente aisladas, emerge una red comunicativa de base geográfica definida y dinámica sustentable.

Puede argumentarse que un pasado de sociedades de fomento barrial o de sociabilidad en clubes deportivos y culturales, junto con el prestigio actual de las ONGs, contribuyeron a hacer viable la aparición de estas redes, pero –como mínimo– hay que pensar en un empate entre fuerzas favorables y desfavorables a la opción de voz horizontal. Nuevamente, pareciera ser mucho más un producto de la opción racional que una consecuencia de algún proceso de metamorfosis de la cultura política. La voz horizontal indica el reconocimiento mutuo de objetivos y afinidades colectivos, volcados siempre a una acción de voz vertical, esto es, de reclamo hacia quienes tienen los instrumentos de decisión o implementación y cumplimiento de iniciativas públicas. Independientemente del resultado final, la práctica de la voz horizontal genera su propia

---

7. Dígase de paso, como la mayoría de los ensayos de O'Donnell sobre aspectos de cultura política.  
8. V. Mariano Grondona en *La Nación*, 10/2/02.

gratificación en términos de diversificar la identidad individual y aumentar la autoestima; es una satisfacción cognitiva y emocional, no necesariamente material, pero que posibilita su continuidad y aumenta las posibilidades, a futuro, de obtener resultados esperados.

Esos aspectos favorables se notan en la capacidad movilizadora de dicha práctica (hasta casi 40% de los argentinos adultos admitió haber participado de algún cacerolazo, marcha, asamblea o piquete entre enero y febrero de 2002, cayendo a 17%-18% un mes después<sup>9</sup>), como también en la imagen positiva de los cacerolazos y marchas pacíficas (cerca de 64% de la población adulta veía aquellas expresiones de voz horizontal con buenos ojos y menos de 10% las condenaba<sup>10</sup>). Más importante aún, la visión positiva se desprendía directamente de la empatía con dichas acciones: casi 2/3 de los entrevistados admitieron sentirse identificados con dichas expresiones públicas.

**Germinando el capital social.** La creciente intensificación y regularización de esas deliberaciones y relaciones asociativas da lugar a lo que muchos científicos conocen como capital social. Solo que aquí la experiencia argentina vuelve a desafiar el argumento-padrón de generación y difusión de dicho capital.

El argumento-padrón indica que el capital social brota de niveles relativamente altos de confianza entre las personas. A su vez, la confianza emerge del optimismo personal como también de la sensación de previsibilidad y transparencia de las conductas de los otros, de la percepción de bajos niveles de violencia y de la satisfacción con el funcionamiento del régimen político (Rennó; Stoller; Uslaner). De hecho, la cuestión de la confianza está en el centro de la generación de afectos y comportamientos democráticos desde hace ya un buen tiempo (Inglehart), solo que la explosión asociativa, deliberativa y participativa argentina ocurre justamente en la situación contraria: cuando el pesimismo es mayor, cuando la percepción de violencia cotidiana e insatisfacción con los políticos y el funcionamiento de la democracia llegaron a un pico sin precedentes, cuando reina la imprevisibilidad de las acciones individuales<sup>11</sup>. Esta contribución del caso argentino merece ser objeto de estudio, también, por la manera explícita con que pone de relieve los límites de proyectar linealmente las conclusiones teóricas desarrolladas en otros contextos. De hecho, uno podría pre-

---

9. Encuestas con muestras urbanas probabilísticas publicadas en *La Nación*, 13/1/02, 24/2/02; *Clarín*, 10/3/02.

10. Encuestas con muestras urbanas probabilísticas publicadas en *Clarín*, 10/3/02; *Página 12*, 10/3/02.

11. Situaciones confirmadas por los diversos estudios de opinión pública publicados en los medios; v. *Clarín*, 10/3/02.

guntarse por qué las personas se incomodarían en movilizarse y participar activamente si sus autoridades responden, las leyes se aplican con ecuanimidad y sin sorpresas, si existe confianza en el futuro y el prestigio de las instituciones permanece en buen nivel. Claro que cuidar y garantizar la vida de emprendimientos asociativos cívicos sería razonable, como también lo sería que las autoridades no desprestigien el funcionamiento de la democracia o que se vigilen y repriman desvíos de la aplicación adecuada de las leyes. Lo concreto es que tenemos evidencia de peso sugiriendo que donde tales precauciones no forman parte de la rutina cívica e institucional, acciones generadoras de capital social se multiplican como recurso de apoyo y repertorio válido de reacción frente a la ausencia de expectativas, al mal desempeño del sistema y al deterioro drástico del orden.

Hacia mediados de marzo de 2002, se estimaba que 1 de cada 10 argentinos estaba regularmente involucrado en las asambleas (casi 2 de cada 10 en la región metropolitana de Buenos Aires<sup>12</sup>), en su gran mayoría individuos diferentes de ese 14% que, hasta entonces, corporizaba lo que tradicionalmente se entiende como capital social, esto es, los participantes de formas voluntarias de organización civil<sup>13</sup>. Actualmente, se estima que existen 272 asambleas barriales permanentes, 40% de ellas en la Capital Federal, justamente donde se registró el pico de movilización política durante el verano (que llevó a las calles a casi 20% de la población total). Como aproximación, esto quiere decir que cada asamblea fue y está siendo animada por más de 8.800 argentinos, movilizandando un total de 2.400.000 jóvenes y adultos<sup>14</sup>. Naturalmente existe la sospecha de una posible súbita descapitalización social en tanto correlato de la rapidez y forma como eclosionó el fenómeno. Allí, sí valdría la pena concentrarse e investigar los factores más sensibles para tal resultado: baja confianza interpersonal, pesimismo sobre la calidad y –eventualmente– el efecto de las iniciativas asociativas, y problemas para entender y actuar en conjunto, esto es, para legitimar un padrón de procedimientos objetivo y ecuaníme.

Sabiendo del abanico de elementos que precisarían ser atendidos por los politólogos, existen ya algunos indicadores aislados que permiten alimentar el optimismo. Para empezar, la duración de las asambleas barriales está a punto de superar los cuatro meses, más de la mitad del periodo crítico típico para la supervivencia de micro-emprendimientos comerciales en Argentina. Puede re-

---

12. *Página 12*, 10/3/02.

13. PNUD, enero de 2002; *Clarín*, 10/3/02.

14. Números sumamente próximos a los calculados por los propios medios, ej.: Raúl Kollman en *Página 12*, 10/3/02.

sultar una comparación extraña, pero mirado desde la perspectiva de acciones que cuentan con el doble desafío de ser de naturaleza colectiva y de objetivos sin fines de lucro, en la comparación con las iniciativas comerciales aquéllas lucen un desempeño que va más allá del éxito momentáneo. Por otro lado, pueden encontrarse diferentes mediciones de la legitimidad de esas iniciativas en algunas encuestas recientes: preguntados sobre la percepción de las asambleas como entes independientes esencialmente vecinales y como nueva forma de acción política, 3 de cada 7 personas coinciden totalmente<sup>15</sup>. Por último, las asambleas han generado rutinas propias y que requieren dedicación, tendientes a generar sentido de identidad como también de eficacia política: algunas organizan «escraches» a figuras políticas (identificándolas públicamente de forma acusatoria), muchas otras han lanzado sus propios vehículos de comunicación (p. ej., en la Capital Federal una asamblea lanzó el primer diario que expresa las opiniones y los reclamos de las asambleas barriales, con un tiraje de 1.200 ejemplares; otras asambleas de localidades de provincia concretaron un espacio radial propio en diferentes radios FM<sup>16</sup>).

Más importante para el optimismo, dadas las penurias del momento, es recordar el efecto de progreso social y material aparejado por el capital social. Tal como concluye Putnam para el caso italiano: cuanto mayor capital social, más se encuentra instituciones que funcionan y condiciones que favorecen el desarrollo y la acumulación de riquezas. El politólogo escéptico se preguntaría: ¿otro ejemplo de «sentarse y esperar» hasta que una condición genere su impacto, tal como el crecimiento generaría democracia o la apertura de la economía generaría riqueza? No; la extensión y multiplicación de experiencias asociativas va de la mano con el aumento de la cooperación y ayuda recíproca, que –en el plano financiero– acostumbran a evolucionar de contribuciones solidarias, pirámides informales de inversión, préstamos específicos y emprendimientos de pequeño porte, hacia prácticas masivas de obras mutuales, esfuerzos cooperativos y esquemas recíprocos de ayuda monetaria, redes de crédito al consumo y formación de sociedades comerciales. De hecho, tales desarrollos ya ocurren en algunas de las asambleas, que organizan planes de asistencia social para los sectores más carenciados, fuerzan la reapertura de comedores escolares antes del inicio del ciclo escolar y multiplican las huertas urbanas<sup>17</sup>.

---

15. *Clarín*, 10/3/02.

16. *La Nación*, 25/3/02.

17. Otros ejemplos de expresiones de capital social que generan desarrollo económico, en otros países sudamericanos, son mencionados por Kliksberg.

18. SAAP: Carta a los asociados, marzo de 2002.

## Finalizando

Si el cuadro de situación actual sugiere que todos los análisis de la realidad argentina deban teñirse de un realismo pesimista, reconocer aquellos aspectos que, al ojo del politólogo, son positivos y alentadores puede resultar un buen contrapeso. Como reflexionaba, recientemente, para la asociación de politólogos argentinos, frente a los innúmeros interrogantes del momento, se trataba de «extraer algunas enseñanzas sobre lo sucedido en los últimos meses a nuestro alrededor y tratar de aplicarlas»<sup>18</sup>. Que entre tales eventos pueda enumerarse el agotamiento del apoyo a un tipo de democracia que prescindía de ciudadanos, la revitalización –aun si restringida socialmente– de prácticas regulares de autoafirmación cívica y la reproducción de un asociativismo politizado con objetivos y recursos propios, capaz de sustentarse en el tiempo, no es poca cosa. Es motivo de sobra para recuperar el entusiasmo politológico y reencontrarnos con el sentido ético que la ciencia política tiene, principalmente, en momentos tan amargos y adversos.

## Referencias

- Almond, Gabriel y Sidney Verba: *Political Culture Revisited*, Little, Brown & Co., Boston, 1980.
- Barrington Moore, Jr.: *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Beacon Press, Boston, 1966.
- Bosoer, Fabián y Santiago Leiras: «Posguerra Fría, 'neodecisionismo' y nueva fase del capitalismo: el alegato del príncipe-gobernante en el escenario global de los 90» en Atilio Borón (comp.): *Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*, Eudeba / Clacso, Buenos Aires, 1999.
- Echegaray, Fabián: «¿Voto económico o referéndum político? Los determinantes de las elecciones presidenciales en América Latina, 1982-1994» en *Desarrollo Económico* N° 142, 1996, p. 36.
- Echegaray, Fabián y Carlos Elordi: «Public Opinion and Market Reform in Argentina, 1989-1996» en Susan Stokes (org.): *Public Support for Market Reform in New Democracies*, Oxford University Press, Cambridge, 2001.
- Hirschman, Albert: *Exit, Voice and Loyalty*, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1970.
- Inglehart, Ronald: *Culture Shift*, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1990.
- Kliksberg, Bernardo: «Capital social y cultura», Documento de Trabajo N° 7, BID / Intal, Buenos Aires, 2000.
- O'Donnell, Guillermo: *Modernización y autoritarismo*, Paidós, Buenos Aires, 1973.
- O'Donnell, Guillermo: *El Estado burocrático-autoritario*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982.
- O'Donnell, Guillermo: *Contrapontos*, Vozes, San Pablo, 1986.
- O'Donnell, Guillermo: «¿Democracia delegativa?» en *Cuadernos del Claeh* N° 61, Montevideo, 1992.
- Olson, Marcus: *The Logic of Collective Action*, Harvard University Press, Cambridge, 1965.
- Putnam, Robert: *Making Democracy Work*, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1994.
- Rennó, Lúcio: «Confianza Interpersonal a Comportamento Político» en *Opinião Pública* 7/1, 2001.
- Rustow, Dankwart: «Transition to Democracy: Towards a Dynamic Model» en *Comparative Politics* 2/3, 1970.
- Stoller, David: «Bowling Together, Bowling Alone: The Development of Generalized Trust in Voluntary Associations» en *Political Psychology* 19/3, 1998.
- Uslaner, Eric: «Social Capital, Television, and the 'Mean World': Trust, Optimism, and Civic Participation» en *Political Psychology* 19/3, 1998.